



Reconsiderando la política EEUU–Colombia

*Estados Unidos y Colombia pueden
romper los ciclos de violencia y represión*

Aldo Civico
Mayo 2007

RECONSIDERANDO LA POLÍTICA EEUU–COLOMBIA

Estados Unidos y Colombia
pueden romper los ciclos de
violencia y represión

Por Aldo Civico

Mayo 2007

Introducción

Los Estados Unidos ha alcanzado una vez más una encrucijada en su relación con Colombia. Frente a la decisión de cómo mejor dirigir sus considerables niveles de asistencia, es esencial que los Estados Unidos no dé la espalda a su compromiso con Colombia. Pero también es crucial que Washington formule política con una comprensión clara de la situación actual en Colombia y de los elementos históricos de esas circunstancias. Comprendiendo dónde se encuentra Colombia hoy y cómo llegó hasta ahí ilustra como los Estados Unidos puede seguir efectivamente dedicado a Colombia y avanzar los intereses estadounidenses y colombianos en el futuro.

Cada vez que un nuevo escándalo surge en Colombia, como el escándalo actual de la “para-política” y que ocupa los titulares internacionales, la gente reacciona echando sus manos al aire y calificando el conflicto en Colombia insuperable. Se necesita, sin embargo, un análisis más complejo que reconozca las raíces culturales, sociales y políticas del conflicto interno de Colombia. Clasificar los conflictos en Colombia en meros términos del terrorismo, del narcotráfico, o de los dos es evaluar los conflictos equivocadamente. Tal punto de vista, en lo que a la formulación de política se refiere, solo llevará al fracaso.

Para crear una Colombia estable, aumentar la seguridad regional, y frenar el narcotráfico más efectivamente, los Estados Unidos debe apoyar las instituciones colombianas que defienden la justicia y que promueven el desarrollo social y económico. Debe hacerlo mientras exigen al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, hacia una nueva agenda política de la paz, una que aumenta la participación política y favorezca el desarrollo humano. La política de Estados Unidos hacia Colombia debe centrarse en promover una paz duradera. Solo una paz duradera constituirá un éxito en la guerra contra las drogas en el contexto colombiano.

La conexión paramilitar

Una reciente ola de revelaciones sobre conexiones existentes entre la clase gobernante y las organizaciones paramilitares ha recibido bastante atención tanto dentro como fuera de Colombia. A pesar de la intensidad de esa atención, es importante reconocer que grupos paramilitares de varios tipos han estado presentes en el paisaje colombiano durante generaciones. Más allá de los titulares sensacionales, es esencial entender correctamente tanto el escándalo actual de la “para-política” como el movimiento paramilitar que lo precedió, para poder responder con una política adecuada.

Como se demostró durante la visita de Uribe a Washington D.C. a principios de Mayo, el escándalo de la para-política que se está desarrollando rápidamente está socavando el capital político del Presidente Uribe, por lo menos fuera de Colombia. Esto no sorprende dadas las revelaciones recientes. Colombia se encuentra en medio de una de las crisis políticas más severas que ha tenido en décadas. Han descubierto que varios políticos destacados tienen relaciones íntimas y establecidas con paramilitares colombianos narcotraficantes. Y los lazos fuertes entre la política y los paramilitares han estado al centro de la política de poder en Colombia durante un tiempo, contribuyendo a un sistema de corrupción y avaricia.

Aunque los que siguen y analizan a Colombia de cerca ya conocían la penetración de los paramilitares en la política,¹ las revelaciones oficiales del secreto público de los vínculos entre políticos y paramilitares puede ser un momento crucial para Colombia. Sin embargo, el escándalo de la para-política presenta una oportunidad de romper con un pasado lleno de impunidad debido a quién está llevando las investigaciones y lo que se está descubriendo.

Las revelaciones al centro del escándalo de la “para-política” han surgido de los esfuerzos investigativos de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia y del independiente Fiscal General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha investigado los nexos entre varios legisladores de la coalición gobernante del Presidente Uribe y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como resultado, varios miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Colombia—hasta la fecha sumando más del 5 por ciento del número total de sus miembros—han sido detenidos por órdenes de la Corte Suprema de Justicia por supuestos lazos con paramilitares.

En Enero de este año los medios colombianos publicaron un documento firmado por al menos 40 políticos (incluyendo 11 legisladores, dos gobernadores, y tres alcaldes) y líderes paramilitares, posterior a una reunión con la AUC en 2001 en Ralito, Córdoba, durante el apogeo de actividad

paramilitar. El documento marcó la formación de un movimiento político clandestino con el propósito de socavar la influencia del grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hay pruebas que hubieron reuniones similares por todo Colombia y las autoridades judiciales están investigando a 60 políticos más.

Las acusaciones de cooperación y complicidad con los paramilitares también han llegado a los niveles más altos de la rama ejecutiva de Colombia. La ministra de relaciones exteriores Maria Consuelo Araujo tuvo que renunciar a principios de 2007 después de que salieron a la luz revelaciones sobre los vínculos entre su familia y la AUC. También a principios de este año, las alegaciones sobre nexos paramilitares causaron la detención del ex-jefe del DAS, la agencia de seguridad interna en Colombia.

Más recientemente, Salvatore Mancuso, un jefe paramilitar importante, testificó que tuvo varias reuniones en 1997 con el vicepresidente colombiano actual Francisco Santos y con el Ministro de Defensa actual Juan Manuel Santos. Después de todas estas revelaciones, el presidente Uribe mantuvo a los miembros de su gabinete, declarando que no tiene dudas sobre la moralidad de los dos Santos. Los Santos, a su vez, pidieron que se investiguen las alegaciones de Mancuso.

Una propuesta reciente del Presidente Uribe para librar a los políticos encarcelados por el escándalo de la para-política si estos confiesan todo sobre los nexos con agentes paramilitares, ha causado críticas y disensión política en Colombia.

Colombia necesita una investigación completa del escándalo de la para-política para cortar los vínculos entre organizaciones dudosas y líderes políticos corruptos que han estado recurriendo a la violencia para adelantar sus agendas políticas y sus intereses. Ésta es una costumbre que ha socavado la participación política libre y democrática en Colombia, y que se debe acabar.

Las raíces de grupos paramilitares

Las estructuras paramilitares en el corazón del escándalo actual tienen raíces a principios de los años ochenta, cuando un grupo de políticos locales, hombres de negocios, ejecutivos de compañías internacionales, oficiales militares y narcotraficantes (como Carlos Lehder y Pablo Escobar), con intereses convergentes, apoyaron y financiaron la formación del grupo de autodefensa paramilitar del Valle Magdalena.²

A mitad de los años noventa, en las regiones de Córdoba y Urabá, los hermanos Fidel y Carlos Castaño iniciaron un proyecto experimental con el fin de aportar a los paramilitares una dimensión social y política. Algunos años después, en 1997, Carlos Castaño estableció la AUC para ampliar el proyecto a un nivel nacional y crear una organización común para los grupos paramilitares del país.

Como demuestran revelaciones recientes—como la que alude a la cumbre clandestina en Ralito, Córdoba en el 2001—Carlos Castaño quería convertir a los paramilitares en un movimiento político clandestino que sería capaz de moldear la política regional y nacional de Colombia. La AUC no era simplemente un enredo de grupos armados ilegales. La AUC representaba más bien un proyecto político más amplio, apoyado por estrategias de terror, con ramificaciones profundas para la política, la economía y el ejército en Colombia.

El proyecto de Carlos Castaño fue acogido por las elites regionales complacientes y financiado por los narcotraficantes que estaban ansiosos por dar una dimensión política a sus actividades ilícitas para así poder proteger sus intereses y promover su agenda. Los jefes mafiosos de los carteles de droga de Cali y del Norte del Valle, por ejemplo, acogieron la visión de Carlos Castaño y con el tiempo convirtieron a la AUC en su ejército privado. Algunos narcos hasta le compraron grupos enteros de paramilitares a Carlos Castaño.

Así es como los esfuerzos paramilitares, que al principio se presentaron y fueron percibidos como

una guerra contra la insurrección de las guerrillas Colombianas, se convirtió en una guerra por las drogas y por el control de las redes de narcotráfico. Esta lucha, a su vez, contribuyó al aumento de violaciones de los derechos humanos por parte de los paramilitares. De hecho, el porcentaje de violaciones de los derechos humanos cometidas por los paramilitares subió de cerca de un 65 por ciento a un 80 por ciento de todas las violaciones cometidas durante el periodo original de 2000 a 2005 cubierto por el Plan Colombia patrocinado por los Estados Unidos.³

En el 2003, Carlos Castaño anunció la desmovilización de la AUC. Después, los jefes paramilitares explicaron que su decisión unilateral fue posible a causa del sistema de seguridad creado por la política de seguridad democrática del presidente Uribe, también revelada en el 2003. Desde entonces, más de 32.000 miembros paramilitares han sido desmovilizados bajo la Ley 975 del Presidente Uribe, que ha sido criticada por no haber derribado el poder paramilitar. El proceso ha estado marcado por ambigüedades y por momentos de gran tensión entre el gobierno colombiano y los jefes de la AUC. La eficacia del proceso de la desmovilización y de la reintegración todavía se discute fieramente en Colombia, en gran parte debido a la percepción de que la infraestructura narcotraficante paramilitar no ha sido desmovilizada adecuadamente.

Mientras tanto, en los últimos meses el país ha presenciado la formación de nuevos grupos criminales ligados a los narcotraficantes, antiguos y nuevos. Estas organizaciones nuevamente formadas están replicando el *modus operandi* de antiguos grupos de autodefensa y en varios casos están reclutando a paramilitares desmovilizados. En Diciembre 2006, el grupo de expertos INDEPAZ publicó una lista de 62 bandas criminales nuevamente formadas que están relacionadas con el narcotráfico.⁴ El año pasado, la misión monitorea colombiana de la Organización de los Estados Americanos mostró la aparición de docenas de nuevas pandillas paramilitares.⁵

Además, pinchazos telefónicos recientes en Colombia ha revelado que por lo menos oficiales paramilitares de medio rango siguen ordenando matanzas y traficando drogas desde las prisiones de alta-seguridad donde están encarcelados bajo los términos del proceso de desmovilización. La formación de estos nuevos grupos criminales, algunos ligados a los antiguos paramilitares, revela la persistencia de este tipo de organizaciones en Colombia a pesar del proceso de desmovilización y reintegración.

El papel de la cocaína

Además, el impulso para estas nuevas organizaciones es endémico en Colombia: cocaína. Cuando legisladores estadounidenses piensan en Colombia, naturalmente se inclinan a tratar de estancar el movimiento de narcóticos ilegales de Colombia a los Estados Unidos. El narcotráfico a menudo se percibe como sólo un problema de crimen organizado que debe ser resuelto principalmente a través de la implementación de la ley y la represión. Este análisis, sin embargo, ignora las causas históricas y sociales del desarrollo de cocaína en Colombia.

Colombia llegó a ser uno de los países principales de la región andina que produce y exporta cocaína principalmente a los Estados Unidos y Europa sólo en las pasadas tres décadas—un desarrollo que ocurrió dentro de un contexto complejo socioeconómico y sociopolítico.

El cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia empezaron en los años setenta en el norte de Guaviare y en la región sur de Caguán. Con el tiempo la cocaína superó la producción y la comercialización de la marihuana, que hasta entonces era la cosecha ilícita principal en Colombia. Como una fuente de poder, el potencial de la cocaína fluyó de su habilidad de concentrar la riqueza y el poder en las manos de unos pocos narcotraficantes. Como resultado, la cocaína en Colombia ha permitido el surgimiento de nuevos élites regionales con ganas de vencer un sistema de exclusión y decididas a formar el destino de sus regiones y su país.

Con la caída de la Unión Soviética en 1991, las Farc recurrieron a la cocaína para financiar su guerra contra el gobierno colombiano y formaron acuerdos en el sur de Colombia con jefes narcotraficantes de los cárteles de Calí y de Norte del Valle. Cuando el presidente Andrés Pastrana decidió, a fines de los años noventa, darle una oportunidad a la paz e inició un diálogo con las Farc, los narcotraficantes se dieron cuenta de que un posible acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc no les otorgaría ni la amnistía ni el privilegio judicial.

Esta realización los impulsó a establecer no sólo una alianza estratégica con las AUC, pero a penetrar la organización. La necesidad de Carlos Castaño de obtener una gran cantidad de dinero para financiar su organización y la necesidad de los narcotraficantes de cubrir su actividad ilícita con un discurso político para llegar a un acuerdo con el estado en el momento oportuno fue la solución perfecta.

A lo largo, las AUC se transformaron en el ejército privado de los narcotraficantes que llegaron a ser señores feudales, imponiendo el orden público sobre las regiones bajo su dominio y controlando las funciones que tradicionalmente le pertenecían al estado. En Colombia, regiones gobernadas por cocaína llegaron a ser países dentro de un país.⁶ Como consecuencia de las revelaciones de la parapolítica, ahora sabemos también que esas disputas, formadas en la periferia, propagaban un sistema de corrupción, que hasta ahora, se apoyaba en la impunidad sistémica.

En resumen, el narcotráfico desarrolló a causa de la exclusión de élites regionales del proceso político quienes buscaron en la periferia del país una alternativa al poder financiado por la cocaína. Aunque la violencia sistémica en Colombia empezó antes del surgimiento de la cocaína como una fuente de poder e influencia, la dinámica y el poder sociopolítico producidos por la cocaína significa que el conflicto interno de Colombia no se trata de ideologías opuestas sino de la dinámica y los intereses arraigados en el narcotráfico.

Un ejemplo claro: el informe de las Naciones Unidas de 2006 acerca de la intensidad del cultivo de coca en Colombia muestra que el tamaño de grupos armados ilegales es más grande y su presencia es más gruesa en municipios donde hay cultivos de coca.⁷ Reconocer la existencia de un conflicto interno financiado por la cocaína en Colombia es clave para abordar las causas del conflicto y también para estancar el movimiento de drogas de Colombia a los Estados Unidos.

¿Paz con la guerrilla?

Aunque la contrainsurgencia raras veces ha sido la meta explícita de la política de Estados Unidos hacia Colombia, la aparente lucha perpetua del gobierno colombiano contra la guerrilla ha afectado profundamente la política estadounidense. Grupos guerrilleros, inclusive el Ejército Nacional de Liberación (ELN) y las Farc, llevan más de cuatro décadas de acción en Colombia, y numerosas tentativas para llegar con ellos a un acuerdo de paz han fracasado. Comprendiendo por qué ha sucedido esto y cómo se puede cambiar, es esencial para la formulación de una nueva política estadounidense.

Los orígenes de las Farc y el ELN se pueden encontrar en las repercusiones inmediatas del período de violencia sectaria en Colombia, entre 1948 y 1954, conocido simplemente como La Violencia. Después del régimen militar del General Rojas Pinilla el partido conservador y el liberal llegaron a un acuerdo entre ellos creando el Frente Nacional. El Frente Nacional proporcionó una alternancia en el gobierno entre los dos partidos, creando la consecuencia de la exclusión política para todos menos los miembros del Frente Nacional.

Simultáneo a la exclusión política sistemática en los años cincuenta, la urbanización y la transformación económica, con un aumento en la industria y el comercio, cambiaron el carácter de la nación y dejaron a las áreas rurales atrás y sintiéndose abandonadas.⁸ Esto también, alimentó el resentimiento y ayudó a crear las condiciones que ocasionaron a los dos movimientos guerrilleros duraderos en Colombia

Las consecuencias de estos acontecimientos se exhiben hasta hoy en Colombia. Al sentarse alrededor de la misma mesa, por ejemplo, el gobierno colombiano, las Farc, y el ELN hablan dos idiomas diferentes y guardan expectativas profundamente distintas. En las negociaciones con la guerrilla, el estado se preocupa principalmente por los aspectos militares de la confrontación y por lo tanto busca acuerdos que se enfocan en crear una tregua y acabar con los secuestros. Cualquier esfuerzo adicional se trata de esfuerzos de desarmar y desmovilizar a los grupos insurgentes.

Por el contrario, los grupos guerrilleros exigen un cambio estructural del estado que aborda las causas primordiales del conflicto y las quejas que justifican la existencia de la insurgencia. Específicamente, exigen una reforma de la constitución que visualiza la descentralización, procesos políticos que refuerzan la participación comunitaria, y una política de paz no sujeto a cambios de gobierno. Además, exigen desarrollo económico y de infraestructura para capacitar a áreas rurales y una política que aborda la crisis humanitaria causada por el conflicto que durante los últimos 10 años ha resultado en el desplazamiento interno de más de 3,5 millones de personas.

Una definición estrecha que clasifica a los grupos insurgentes como grupos criminales y terroristas, como la que el presidente Uribe ha adoptado,⁹ permite el fortalecimiento de un enfoque al conflicto puramente militar. La experiencia en la disciplina de resolución de conflicto, sin embargo, sugiere que cuándo se trata de asuntos de inclusión e identidad, la búsqueda de seguridad y paz puramente con tácticas militares prolonga el conflicto. De hecho, un enfoque exclusivamente militar del estado justifica el uso de violencia por los insurgentes y refuerza su retórica contra el estado, agravando aún más el conflicto y volviéndolo más intratable.

En un nivel práctico, más de 40 años de violencia insurgente en Colombia muestra que una solución estrictamente militar no es conducente a la resolución del conflicto. Las intervenciones militares

en Colombia siempre fueron contraproducentes y han prolongado el conflicto interno, haciendo las negociaciones más difíciles y dándole a la guerrilla más razón para pelear y seguir creciendo.

Una negociación, en cambio, favorece un ambiente en que posibles alternativas y soluciones políticas se pueden explorar. Colombia, por supuesto, no sería única en este caso. Irlanda del Norte ha celebrado el logro de paz que vino sólo después de una búsqueda larga y seria para una solución política al conflicto. En Sudáfrica, las organizaciones rebeldes renunciaron el uso de la violencia sólo después de que fueron incluidos en el proceso político.

Una comprensión apropiada de la dinámica del conflicto en Colombia que implica al ELN y las Farc demuestra claramente la necesidad de una solución política a su lucha de más de cuatro décadas. Un enfoque solamente militar y represivo no es conducente a una paz duradera.

El proceso de paz con el ELN

Durante el pasado año y medio, el gobierno colombiano y el ELN han participado de diálogos preliminares. Aunque la lentitud del progreso ha frustrado a muchos en Colombia, el sólo hecho de que los dos partidos estén en diálogo es algo positivo. En las semanas que vienen, este esfuerzo podría tomar un paso decisivo. Los Estados Unidos debe seguir con prudencia el desarrollo de este proceso. Para hacerlo, es importante entender la naturaleza de este grupo guerrillero y su actual estrategia de negociación.

Algunos expertos consideran que el inicio del ELN pudiera comenzar en los tiempos de la llamada “insurrección bolchevique,” colombiana en 1929, cuando unos artesanos y campesinos llevaron a cabo ataques simultáneos en distintas partes del país, sobre todo en San Vicente de Chucurí. El éxito revela la capacidad de los artesanos y campesinos colombianos para utilizar la violencia como medio de resistencia. El estado derrotó brutalmente el intento de rebelión de 1929, reforzando la percepción que el estado se manifiesta a través de la coerción.

Mientras el estado interpretó la insurrección como sólo un problema de seguridad—uno que se podría solucionar con la represión—la izquierda en Colombia (especialmente el difunto Partido Revolucionario Socialista) declaró que sólo las reformas socioeconómicas y políticas podrían abordar efectivamente las raíces de la rebelión.¹⁰ Hoy día se encuentran rastros de estas dos percepciones distintas en el diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN.

Impulsado por la Revolución Cubana, el ELN fue formado el 4 de julio de 1964 en San Vicente de Chucurí. En su primera fase, el nuevo grupo rebelde se propuso lograr una transformación radical, social, política y económica en Colombia. Hasta el presente, el ELN se ve como una fuerza de la transformación.

La estrategia actual del ELN se caracteriza por la búsqueda de una solución política (no militar) al conflicto interno de Colombia. Es decir, la transformación política y social para el ELN será el resultado del diálogo, del consenso, y de la negociación. En un documento del 2004, el Directivo Nacional del ELN afirmó la importancia del “diálogo auténtico” para una “solución política” del conflicto, y la necesidad de trabajar con “las diferentes fuerzas sociales y políticas” para conseguir “un gran consenso nacional.”¹¹ En los últimos 15 años, el ELN cambió su enfoque militar a la actividad política y es ahora mucho menos fuerte en su capacidad militar que las Farc o los paramilitares. Además, hoy, por primera vez en su historia el ELN se encuentra, como parte de sus diálogos progresivos con el gobierno colombiano, cerca a firmar un acuerdo para cesar las hostilidades.

En el otoño de 2005, se logró un acuerdo entre el gobierno colombiano y el ELN. Una Casa de Paz fue establecida por un grupo de facilitadores como un campo abierto en Medellín donde representantes de la sociedad colombiana podrían encontrar a portavoces del ELN. Dentro de la Casa de Paz, se han explorado ideas para una solución política al conflicto interno en un experimento que ha acentuado el papel positivo de la sociedad civil como un partido tercero en el apoyo del diálogo oficial.

Desde la inauguración de la Casa de Paz, se han realizado cinco reuniones en Cuba entre el ELN y el gobierno colombiano. Actualmente el ELN ha aceptado en principio una tregua temporaria y exploratoria que se negocia ahora en La Habana. Aunque los discursos atraviesan un momento difícil, por primera vez en años existe la esperanza de llegar a un acuerdo.

El gobierno colombiano y el ELN necesitan mostrar avances y resultados proviniendo del diálogo. El gobierno, estancado por el escándalo actual y rodeado en la región por gobiernos de izquierda, necesita avanzar la oportunidad para la paz a través de la negociación con una organización guerrillera. El ELN, un grupo guerrillero que se encuentra mucho menos implicado en el narcotráfico que las Farc, se enfrenta a dificultad económica y se sostiene principalmente con dinero de secuestros y protección. En los últimos meses el ELN ha tenido enfrentamientos militares con las Farc en algunas regiones del país.

Si el ELN no es capaz de obtener avances significativos en su diálogo con el gobierno colombiano, enfrenta el riesgo de incorporarse en las FARC o bien de entrar con mayor fuerza al narcotráfico, lo cual el ELN ha resistido hasta ahora, con la excepción de alguno de sus frentes militares. Además, debido a la investigación actual que rompe las relaciones entre elites políticas corruptas y los paramilitares, hay un espacio político libre lo cual permite al ELN participar democráticamente. Igualmente, un proceso de paz exitoso con el ELN puede funcionar como modelo para un proceso de paz con las Farc en el futuro.

Acuerdo Humanitario con las Farc

Por contraste a su estrategia actual con el ELN, el presidente Uribe ha mantenido un idioma fuerte y mano dura contra las Farc. Sin embargo, esa estrategia no parece haber sido totalmente exitosa. En los últimos meses, las Farc, el grupo guerrillero más antiguo y más grande de Colombia, ha aumentado el número de ataques contra comisarías y la población civil en áreas controladas por el

ejército. Aunque el presidente Uribe ha comenzado a mostrar que estaría dispuesto a negociar un acuerdo humanitario, basado en un intercambio de “presos” con las Farc, las condiciones que él ha puesto todavía aparecen ser inaceptables a las Farc.

La incapacidad del estado colombiano y de las Farc de llegar a un acuerdo no es nada nuevo. De hecho, las Farc surgieron en el contexto de la violencia política en Colombia. El líder de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, nació el 12 de mayo de 1930 a una familia campesina que fue implicada profundamente en la guerra civil sectaria entre liberales y conservadores conocida como La Violencia (1948-54). Anterior a la revolución de Castro en Cuba, Marulanda formó el primer grupo liberal guerrillero en 1948, para luchar contra el gobierno militar conservador de Mariano Ospina. Años después, el 27 de mayo de 1964, formó las Farc, y buscó un programa de reforma agraria que reflejaba los movimientos campesinos de la revolución mexicana y la insurrección de Sandino en Nicaragua.

Desde entonces, las Farc ha resistido varias tentativas militares en su contra y para el 1984 disponían de una fuerza de 27 batallones. A mediados de los años ochenta, bajo el presidente Belisario Bentacur, los diálogos de la paz fueron realizados pero terminaron de repente cuando el ejército colombiano realizó un fuerte ataque desprevenido contra las Farc. A finales de la década de los noventa, el presidente Pastrana procuró iniciar negociaciones de paz de nuevo. Después de que esos diálogos se rompieron a pesar de la concesión de una zona de territorio a las Farc como una condición para el diálogo, no han existido tentativas renovadas para iniciar un proceso de paz con las Farc. Hoy, no existen las condiciones para un proceso de paz mientras la confrontación permanece puramente militar.

A través de los años, las Farc ha cambiado su discurso ideológico. Abandonó la ortodoxia marxista-leninista y adoptó un socialismo nacionalista, exigió reforma social y se mostró tolerante al capitalismo de poco envergadura. Según su liderazgo, las Farc se percibe como una alternativa de “buen gobierno.” Desde que el presidente Uribe asumió la presidencia,

sin embargo, el liderazgo de las Farc ha rechazado cualquier diálogo con el gobierno colombiano y en los últimos meses las Farc ha aumentado sus ataques contra la policía y las fuerzas armadas colombianas.

Estos ataques han puesto en cuestión la proclamación de Uribe que su política de seguridad democrática ha debilitado el grupo. Junto con la politización de cualquier acuerdo humanitario posible entre las Farc y el gobierno colombiano que permita el cambio de “presos,” los obstáculos de un trato son significativos aunque exista razón para tener esperanzas. Las Farc busca la clase de reconocimiento político que un acuerdo humanitario implicaría casi necesariamente.

Por contraste, el gobierno quizás necesite recuperar su legitimidad, en parte, por un acuerdo humanitario—especialmente si el escándalo presente de la pára-política continua a profundizarse. Sobre todo, hay la necesidad de liberar a las 56 personas

(policías, soldados, y legisladores) que han estado en manos de las Farc durante varios años; algunos hasta nueve años, y entre ellos tres ciudadanos de los Estados Unidos. Francia, España, y Suiza le han hecho una propuesta al gobierno colombiano y a las Farc que un área geográfica del departamento del Valle del Cauca que consiste en los municipios de Florida y Pradera sea designada como un punto de reunión para la negociación de un acuerdo humanitario. La propuesta ha sido aprobada por miembros del congreso estadounidense y ahora el presidente Uribe necesita mostrar la voluntad política para llegar a un acuerdo que permitirá la liberación de 56 rehenes y fomentará un “ámbito de confianza” para el proceso de paz futuro con las Farc. En días recientes, el presidente Uribe dijo que guerrilleros detenidos por el gobierno colombiano serían liberados el 7 de junio “en el interés nacional,” pero no enumeró más. Una decisión tan unilateral, sin un acuerdo humanitario, no garantiza la liberación de los 56 rehenes de las Farc.

Buscando un nuevo paradigma

Los Estados Unidos necesita una política integral para Colombia que entienda y reconozca la complejidad del conflicto interno de Colombia y que no lo vea exclusivamente por los lentes del narcotráfico ni el terrorismo. Promoviendo la libertad, seguridad, y oportunidad está en el interés nacional de los Estados Unidos por todos partes de la América Latina pero especialmente en Colombia.

En los últimos dos años, América Latina ha presenciado una ola de elecciones democráticas importantes que reflejan el entusiasmo de la gente para una vida mejor y más justa. En un mundo cada vez más interdependiente hay una necesidad creciente para compartir valores, oportunidades, metas, y riqueza a través de fronteras nacionales. Al satisfacer estas necesidades los Estados Unidos se encontraría más seguro. Por eso los Estados Unidos y Colombia necesitan un nuevo conjunto de políticas basado en el principio de la “fraternidad interdependiente” que permita una unidad de propósito entre las dos naciones que respeta la diversidad. Como parte de una política más completa para América Latina, los Estados Unidos tiene que promover en Colombia la paz como la meta principal de su apoyo al país. Esto sólo puede ser logrado si el presidente Uribe reconoce que Colombia es afectado por un conflicto interno que tiene raíces antiguas, sociales y políticas.

De la cocaína a la perpetuación del conflicto armado, cualquier solución a los conflictos múltiples de Colombia no se encuentra solamente a través de la represión y la ayuda militar. La historia de Colombia esta repleta de ejemplos de acción violenta y de sistemas de gobernación basados en la represión y la exclusión. La paz en Colombia significa la inclusión, el desarrollo humano, y el fortalecimiento de instituciones democráticas. La paz permitirá que Colombia cambie de una democracia solamente formal a una profunda y substancial.

Para lograr el éxito en la guerra contra las drogas que pueda ser peleada exitosamente en Colombia, los Estados Unidos necesita promover e invertir en el desarrollo de una cultura de legalidad y derechos humanos. Así se puede luchar efectivamente contra la corrupción y fortalecer el estado de derecho y la democracia. Para esto, los Estados Unidos debe:

1. Modificar su financiación de Plan Colombia para proporcionar más recursos al fortalecimiento del estado de derecho y la promoción del desarrollo humano.
 - El trabajo de fiscales que desenmascaran las conexiones entre los paramilitares, los legisladores, y altos funcionarios militares manda el mensaje importante que la impunidad ya no es garantizada. Los Estados Unidos debe apoyar totalmente el estado de derecho y fortalecer el apoyo para una magistratura fuerte e independiente.

- Los Estados Unidos debe utilizar su influencia para apoyar y alentar el trabajo de estos fiscales. El Congreso debe aumentar el financiamiento de la instrucción, seguridad, y infraestructura esencial a jueces y fiscales colombianos en realizando sus investigaciones del escándalo de la pára-política.
2. Apoyar un papel más visible para las víctimas del conflicto interno que actualmente están ayudando a Colombia destapar las verdades inoportunas para promover una cultura de derechos humanos.
 - Los Estados Unidos debe financiar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, que carece de fondos y le permite a las víctimas de la violencia política surgir y dar su testimonio.
 - Los Estados Unidos debe presionar al presidente Uribe que garantice la protección para las víctimas y sus familias que dan su testimonio voluntariamente a fiscales. Los Estados Unidos le debe pedir también al presidente Uribe que garantice la protección a políticos que denuncian conexiones entre paramilitares y la política.
 3. Promover el desarrollo sostenible y el desarrollo humano como parte de una estrategia de paz para Colombia:
 - Incrementar la ayuda para los programas que otorgan poder a personas desplazadas internamente a través de procesos participativos que protegen y promueven sus derechos como ciudadanos, facilitan su inclusión, y desarrollan las aptitudes que les proporcionen independencia económica. Los Estados Unidos debe buscar alentar y apoyar especialmente las iniciativas cívicas y los programas económicos a un nivel regional y municipal.
 - Suspender la ayuda para la fumigación aérea de cosechas de coca, al apoyar los programas para la erradicación manual de campos poseídos por campesinos.
 4. Apoyar los esfuerzos para la desmovilización y la reintegración de ex-combatientes:
 - Apoyar a la oficina del Alto Consejero Presidencial para la Reintegración de ex-Combatientes, dirigido hoy por Frank Pearle, con instrucción y recursos financieros; y apoyar el desarme, la desmovilización, y los programas de reintegración de municipios como Medellín.
 - Apoyar los proyectos de desarrollo sostenible y promover un gobierno que beneficia a las comunidades donde los ex-combatientes están concentrados, promoviendo una cultura de ciudadanía y derechos humanos.
 - Animar al presidente Uribe a que extradite a los Estados Unidos los narcotraficantes que también fueron líderes paramilitares de las AUC, especialmente a la luz de revelaciones recientes de copias de conversaciones secretas en las que miembros paramilitares encarcelados ordenaron asesinatos y administraron operaciones de narcotráfico.
 5. Entender la conexión entre la conclusión exitosa del proceso de paz con el ELN y las Farc y el posible éxito en la guerra contra las drogas en el contexto colombiano.
 - El histórico conflicto interno de Colombia encontrará una solución sólo a través de un arreglo político, producto de una negociación que afrontará ambos asuntos militares y humanitarios.
 - Para promover los procesos de paz exitosos, los Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos del diálogo actual entre el gobierno colombiano y el ELN, para facilitar un diálogo si los partidos lo solicita.
 - Ya que no existe una demanda de extradición para cualquier de los líderes del ELN, los Estados Unidos debe considerar la posibilidad de suspender al ELN condicionalmente de la

lista de organizaciones terroristas si un cese de hostilidades (inclusive un fin a los secuestros y la liberación de rehenes) es declarado y es verdaderamente implementado. Una propuesta similar fue presentada recientemente por un grupo de parlamentarios europeos en Bruselas. Tal acción quizás refleje el papel muy significativo que los Estados Unidos jugó cuando facilitó el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte. Cuando el presidente Clinton le otorgó a Gerry Adams una visa para viajar a los Estados Unidos, el proceso de paz dio un paso hacia delante significativo.

- Los Estados Unidos debe apoyar y darle la bienvenida a cualquiera iniciativa que pueda tener el resultado de facilitar un acuerdo humanitario con las Farc. El acuerdo permitiría la liberación de 56 individuos, incluso tres ciudadanos estadounidenses y numerosos congresistas colombianos, regionales y nacionales. Una carta reciente firmada por miembros del Congreso estadounidense fue

bien recibida en Colombia por los partidos en conflicto y representa una oportunidad de construir las condiciones para un acuerdo humanitario que quizás fomente ámbitos de confianza para la negociación del acuerdo, especialmente si el diálogo con el ELN tiene éxito. Ahora, el gobierno estadounidense necesita apoyar al presidente Uribe para que encuentre una solución que permita un intercambio de rehenes y presos.

Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia, actuando juntos en un espíritu verdadero de fraternidad interdependiente, pueden fortalecer las instituciones democráticas de Colombia y acabar décadas de conflicto con esfuerzos sostenidos que buscan la paz y la reconciliación regional a través de Colombia. La fuerza y la represión militar solos simplemente no funcionan, como tampoco funciona hacer promesas falsas acerca de los diálogos de paz. Sólo un esfuerzo unificado para la paz y la reconciliación solucionará el problema.

Sobre el autor

Aldo Civico es el director del Center for International Conflict Resolution en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y consejero mayor al Project on Justice in Times of Transition. Civico también es un especialista afiliado con el Center for American Progress. Desde el 2001, él ha realizado investigaciones en Colombia y está escribiendo un libro acerca de los paramilitares. En la década de los 90, fue un consejero mayor a el alcalde anti-mafia Palermo Leoluca Orlando. Él es el autor de *La Scelta* (1993), la biografía del pionero anti-mafia Ennio Pintacuda, y de "Portrait of a Paramilitary," un capítulo en *Engaged Observer* redactado por Victoria Sanford y Angel-Ajani (Rutgers University Press 2006).

Sobre el Proyecto de las Américas

El Proyecto de las Américas del Center for American Progress enfoca sus esfuerzos en cuanto a las relaciones entre EEUU y América Latina y la posición y lugar de EEUU en las Américas. Los EEUU esta atravesando una serie de cambios dramáticos que tendrán un impacto muy serio en su futuro y los cuales se manifiestan en el gran crecimiento de su población hispana y en el aumento continuo de las interconexiones con sus vecinos en las Américas. A través de investigaciones rigurosas y colaboración abierta, el Proyecto de las Américas tiene como meta explorar detalladamente y a su vez entender mejor esos cambios, así como también la relación e implicaciones que existen entre ellos y sus implicaciones para el desarrollo de políticas progresistas tanto internas como externas El Proyecto de las Américas tiene como objetivo elaborar recomendaciones novedosas para hacerle frente a estas realidades tan sujetas a cambios continuos, así como también estimular la participación activa del conjunto de los medios de comunicación para lograr una mejor difusión al público de sus propuestas en una forma rápida, efectiva y clara.

Referencias

- 1 Muchos informes habían hablado de la conexión. En 2003, por ejemplo, el Informe de Desarrollo de las Naciones Unidas subrayó que “ciertos oficiales, algunos comandos militares, uno políticos, y hasta algunos negociantes importantes...respaldan (o están colocados con) las actividades de los grupos paramilitares. Apoyo de arriba ayudo explicar porque grupos regionales de autodefensa tienen cierta articulación y visibilidad en el ambito nacional, o porque el paramilitarismo crecio como una respuesta a dialogos de paz con las guerrillas y esfuerzos para reformar or abrir el sistema político durante los últimos 20 años.” Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, El Conflicto, callejón con salida, 23 (Bogota, Colombia, 2003).
- 2 Corporación Observatorio para la Paz, Las verdaderas intenciones de los paramilitares, (Bogota, Colombia 2002); Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación: el caso “Puerto Boyaca,” (Bogota, Colombia 1990).
- 3 Hylton 2006:3
- 4 Se puede encontrar una lista en: <http://www.cipcol.org/archives/000369.htm>.
- 5 Organization of American States, Septimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (2006).
- 6 Moises Naím, Illicit: How smugglers, traffickers, and copycats are hijacking the global economy, (New York 2005).
- 7 United Nations Office on Drugs and Crime, Colombia: Coca Cultivation Survey, (New York 2006).
- 8 Gustavo Duncan, Los señores de la Guerra. De Paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, (Bogota, Colombia 2006).
- 9 Uribe prometió derrotar a las guerrillas antes de ser elegido presidente de Colombia por primera vez.
- 10 Alejo Vargas, Guerra o solución negociada. ELN: origen, evolución y procesos de paz, (Bogota, Colombia 2006).
- 11 Alejo Vargas, Guerra o solución negociada. ELN: origen, evolución y procesos de paz, 223 (Bogota, Colombia 2006).

Center for American Progress



ABOUT THE CENTER FOR AMERICAN PROGRESS

The Center for American Progress is a nonpartisan research and educational institute dedicated to promoting a strong, just and free America that ensures opportunity for all. We believe that Americans are bound together by a common commitment to these values and we aspire to ensure that our national policies reflect these values. We work to find progressive and pragmatic solutions to significant domestic and international problems and develop policy proposals that foster a government that is “of the people, by the people, and for the people.”

Center for American Progress
1333 H Street, NW, 10th Floor
Washington, DC 20005
Tel: 202.682.1611 • Fax: 202.682.1867
www.americanprogress.org